

Sobre los procesos de democratización del Estado

En la segunda quincena de mayo tuvo lugar, en el Poliforum Siqueiros de esta ciudad, la reunión del XVIII Congreso del Partido Comunista Mexicano.

Algunos periodistas capitalinos, quienes minimizaron la importancia del evento, se limitaron a comentar únicamente el hecho que los comunistas se reunían ahora en sesiones plenarias públicas, y no en forma oculta y clandestina. Otros diarios, en cambio, publicaron los acuerdos más generales logrados al interior del PCM. No hubo, sin embargo, comentarios significativos sobre el sentido y la importancia política de esta reunión.

Por nuestra parte quisiéramos el día de hoy comentar el significado y la importancia política que implicó esta reunión partidaria, y esto en función no de una pretendida idea sobre una supuesta enorme fuerza política del Partido Comunista en nuestro país, que evidentemente no posee, sino conectado con otros fenómenos políticos importantes dentro de la esfera de gobierno.

Así los rasgos de importancia que asumiría el pasado Congreso del PCM radicarían en lo siguiente: la reunión hecha a plena luz del día de un partido tradicionalmente perseguido y reprimido por casi todos los gobiernos, excepción de los de Calles, Cárdenas, Echeverría y el actual gobierno, es el resultado evidente de la conjugación de varios acontecimientos políticos al interior del Estado mexicano, que han dado lugar a una modificación importante en las líneas de gobierno hasta ahora mantenidas. Podríamos decir que la importancia de la reunión del PCM no radica en el hecho mismo, sino en el trasfondo político de éste. En la modificación sustancial que actual y gradualmente se va llevando a cabo al interior de las esferas de poder, y que ya sea el suceso aquí reseñado, o la huelga de los médicos, o el problema universitario, dejan entrever públicamente.

Las importantes modificaciones del sistema político mexicano acaecidas recientemente encontrarían explicación, en parte, a través del análisis del pasado Congreso comunista en nuestra ciudad.

De esta manera, asumiendo nuestra hipótesis sobre la existencia de importantes cambios que se están generando paulatinamente al interior de la estructura de poder del Estado mexicano, es fácil deducir de estas modificaciones la desaparición gradual de las tradicionales políticas represivas y antidemocráticas, que caracterizaron durante mucho tiempo a pasados gobiernos en su trato con organizaciones de masas, no oficiales. Así, bajo esta coyuntura política, que muchos insisten en llamar de "apertura democrática", el Partido Comunista Mexicano, junto con otras organizaciones de izquierda, ad-

quiere carta de naturalización como organismo con derecho a jugar políticamente dentro de las esferas de gobierno y a aspirar a cargos públicos de importancia.

De otra parte, la presencia en el juego político oficial de partidos tradicionalmente excluidos de éste, bajo el pretexto de tratarse de organizaciones subversivas, partidarias del derrocamiento violento del Estado, según *slogans* anti-comunistas muy de moda en los periodos de represión de masas, invalida el argumento en torno al supuesto carácter anti-Estado burgués que pretendidamente asumía el Partido Comunista Mexicano. En otros términos, tradicionalmente se intentó identificar al PCM con el tipo de organización política al margen de la ley a causa de sus pretendidos intentos por derrocar al régimen de gobierno que nos rige. Esto justificaba tanto la represión sobre los comunistas, como su exclusión de los cargos públicos de importancia, desde donde, se pensaba, podrían, ya infiltrados, minar la estructura del Estado mexicano.

Hoy, gracias al paciente trabajo hecho para demostrar la falsedad de este argumento, realizado no tanto por el mismo PCM, sino por grupos democráticos del gobierno, es susceptible ventilar públicamente la cuestión del reconocimiento legal de este partido, sin dar lugar ello a una paranoia colectiva, anticomunista, como se estiló en tiempos pasados.

Tan importante, como ha sido para muchos sectores de la población entender la falsedad de los argumentos anticomunistas, ha sido también el entender el carácter político del PCM, y con ello el carácter de las reformas políticas que desde el gobierno de Luis Echeverría a la fecha se han intentado introducir en la esfera de los mandos del Estado.

El fundamento de los temores políticos sobre la viabilidad de la inclusión del Partido Comunista al interior del juego político de gobierno, siempre fueron los principios programáticos de esta organización, cuando explicaba su visión partidaria del desarrollo histórico de la humanidad: esto es, el camino futuro hacia el socialismo. Sin embargo la mala lectura de los documentos programáticos llevó a pensar a muchos que, implícito a estos buenos deseos sobre el porvenir de la humanidad, estaba incluida una estrategia definida para el derrocamiento del Estado mexicano.

De esta manera es fácil comprender cómo la exclusión política del PCM de los sectores de gobierno se debió entre otros motivos a las acciones de los grupos derechistas, que clamaron públicamente sobre una supuesta subversión de esta organización de izquierda.

La pregunta obligada aquí sería entonces: ¿qué es lo que ha pasado al interior del gobierno en años recientes, que permiten vislumbrar el reconocimiento legal de un partido tradicionalmente perseguido y condenado por el régimen? ¿Cuáles son las causas que están generando un proceso democratizador dentro del sistema de poder mexicano?

Respondiendo de manera general, ante la dificultad de emitir juicios particulares, debido a la cercanía temporal de los acontecimientos, pensaríamos

que ha sido la crisis internacional del capitalismo, cuyos efectos en nuestra economía han sido muy adversos, la que ha originado la necesidad en algunos sectores de la burguesía en México de promover cambios en la estructura económica nacional, para superar felizmente la crisis. Esto, por supuesto, conlleva cambios políticos y reformas en la estructura de poder, los cuales sólo pueden ser realizados por los grupos de gobierno partidarios de un mayor juego político dentro del Estado, de la institucionalización de mecanismos de negociación y conciliación de intereses; esto es, de una mayor democratización del régimen político mexicano. La línea política de José López Portillo iría en este sentido.

Y es aquí que la presencia política del Partido Comunista Mexicano y otras menos influyentes organizaciones de izquierda al interior del gobierno, ayudaría al fortalecimiento del proceso democratizador, al añadir nuevas fuerzas al bando de los partidarios del cambio político.

Por lo que toca a los grupos de la burguesía del norte en nuestro país, quienes tradicionalmente han asumido una política de derecha al interior del Estado, la crisis económica del capitalismo mexicano los ha afectado mucho más sensiblemente que a cualquier otro grupo económico local. Más débiles en cuanto recursos de capital y más atrasados tecnológicamente para sortear, sin grandes problemas, los efectos de la recesión económica actual, se ven obligados a presionar políticamente para que el Estado mexicano haga suyo, en su totalidad, el proyecto de austeridad económica; esto es, de aumento en la productividad y congelamiento de los salarios, como única medida para lograr salvarse de la quiebra eminente. Esto implica paralizar todo proyecto político que promueve el desarrollo económico a través de las inversiones estatales y movilizar los aparatos de represión contra todo movimiento obrero o campesino que pugne por mejores condiciones de vida.

Esta política de los grupos empresariales más reaccionarios implica estar en contra de todo proyecto de intervencionismo estatal en la economía y de mayor democratización en la vida política nacional, sostenido por los grupos de izquierda en el país, de los cuales el Partido Comunista Mexicano sería su representante más radical en este momento.

Los peligros de llevar a cabo una política de Estado que lesione los intereses gravemente dañados de los empresarios económicamente débiles y atrasados consiste en un progresivo endurecimiento de las políticas de los grupos de derecha, en una mayor intransigencia en la negociación política por parte de estos grupos y mayores obstáculos para que al interior del Estado mexicano se desarrollen los procesos políticos con normalidad y sin violencias.

Los grupos conservadores en el país, mermada su influencia económica a causa de los daños sufridos por la crisis internacional del capitalismo y con escasa influencia política en los ámbitos de negociación del Estado, asumen que la presencia de más grupos de izquierda en el gobierno, y más radicalizados en sus proyectos políticos, puede significar, en estos momentos de depresión económica, mayores dificultades para ellos. Y por esto se provee su

radicalización hacia posiciones más reaccionarias y conservadoras políticamente.

Los grupos conservadores en el país, tradicionalmente débiles en el campo de las fuerzas políticas del Estado, se encontrarían con que el proceso actual de fortalecimiento de los grupos de gobierno, inclinados siempre a la negociación política y a la conciliación de los intereses, merma aún más la ya reducida fuerza de los intransigentes políticos, que sólo reconocen los golpes de fuerza y el chantaje al gobierno como forma de hacer política.

Pero a pesar de estos signos amenazantes que representan las políticas duras de gobierno, consideramos que el país actualmente vive un proceso de maduración de las condiciones democráticas al interior del Estado. La reforma electoral que se halla en estos momentos en proceso de discusión sería el ejemplo más elocuente de ello. De otro lado, también se avizoran posibles cambios en la estructura del control obrero, que desplazarían en forma gradual parte del poder de las grandes centrales sindicales a otras organizaciones obreras no oficiales. Pero esto, insistimos, sólo como posibilidad.

9 de junio de 1977

Javier Rosas